



Programa
Mundial de
Alimentos

SALVAR
VIDAS
CAMBIAR
VIDAS



TOMO 5

ESA

**Evaluación Nacional de
Seguridad Alimentaria 2024**

**GESTIÓN DEL RIESGO A
DESASTRES Y
PROTECCIÓN SOCIAL**

WFP Guatemala, diciembre de 2024

ÍNDICE

I.	Contexto	3
II.	Impacto del cambio climático.....	5
III.	Gestión del riesgo a desastres	10
IV.	Redes de protección social	13
V.	Seguridad y desplazamiento	15
a.	Seguridad	15
b.	Desplazamiento forzado	16
VI.	Hallazgos clave	18
VII.	Bibliografía	19



I. CONTEXTO

Exposición y vulnerabilidad a desastres

Guatemala es un país que por su ubicación y características geográficas tiene alta exposición a eventos y fenómenos de origen natural. Se ubica al norte del istmo centroamericano, caracterizada por dos grandes sistemas de cordilleras (de oeste a este), separados por fallas geológicas que han formado una cadena volcánica, montañas, altiplanicies y tierras bajas. El país contiene más de 35 cuencas que drenan a tres grandes vertientes: Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe; y con ello el relieve y el clima han contribuido a definir 13 zonas de medios de vida (FEWSNET, 2017). Entre 2009 y 2021, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) registró más de 34 mil incidentes de depresiones tropicales y huracanes, lluvias intensas, deslizamientos y movimientos de tierras, sismos y terremotos, descensos de temperatura y frentes fríos, vientos fuertes, granizadas e incendios estructurales o forestales (CONRED, 2024:17). Estos eventos constituyen amenazas “que constantemente impactan negativamente a su población debido a la alta vulnerabilidad presente en los distintos territorios” (CONRED, 2024:1). Esta situación es exacerbada negativamente por el cambio climático según el Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático (SGCCC, 2019:6).

La vulnerabilidad a desastres y al cambio climático es “histórica y socialmente, determinada por factores socioculturales y ambientales, asociados al desarrollo que caracteriza y predispone a un individuo o sociedad a sufrir daños en caso del impacto de un [fenómeno o amenaza], afectando su capacidad de recuperación” (CONRED, 2012:5). Algunos factores asociados a la dimensión socioeconómica de esta vulnerabilidad son los ingresos y los tipos de empleo, la propiedad de la vivienda, el acceso a servicios de seguridad social, el capital social, la organización comunitaria, la estructura familiar, el desplazamiento, el acceso a medios de comunicación social y el acceso a salud y educación (CONRED, 2012).

Como consecuencia de esta vulnerabilidad, según el World Risk Report 2021, Guatemala es el décimo país del mundo con mayor riesgo a desastres y, según el Global Climate Risk Index 2021, el 16° país del mundo más afectado por eventos extremos (como sequías, huracanes y excesos de lluvia). Esta vulnerabilidad incide en altos impactos por desastres, a modo que se estima que 28 millones de personas fueron afectadas por eventos ocurridos entre 2008 y 2021 (Barillas, 2022) y que hubo USD 6,270 millones de dólares en pérdidas económicas por desastres en las últimas décadas (MARN y SEGEPLAN, 2021:26). Los desastres interrumpen procesos de desarrollo, afectando la vida y salud de las personas, impactan a las cosechas, las viviendas, infraestructura pública y productiva e interrumpen la provisión de los servicios de salud y educación, obligando a dirigir recursos para la respuesta ante emergencias, por encima de la satisfacción de necesidades esenciales, afectando desproporcionalmente a la población menos resiliente y más vulnerable a condiciones desfavorables de vida (CONRED, 2015:12).

Protección Social

Según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en inglés), Guatemala enfrenta un contexto de crisis recurrentes generadas por desastres naturales y condiciones estructurales que generan inequidad, el cual se ve agravado por la emergencia climática. Sin embargo, la población guatemalteca enfrenta dificultades para acceder de forma efectiva a la protección social (PS), situación que se recrudece en emergencias. Estas barreras se exacerban particularmente para grupos específicos, como las personas damnificadas por desastres de desarrollo lento, y las poblaciones extranjeras en situación de vulnerabilidad (NORCAP, 2024:5).

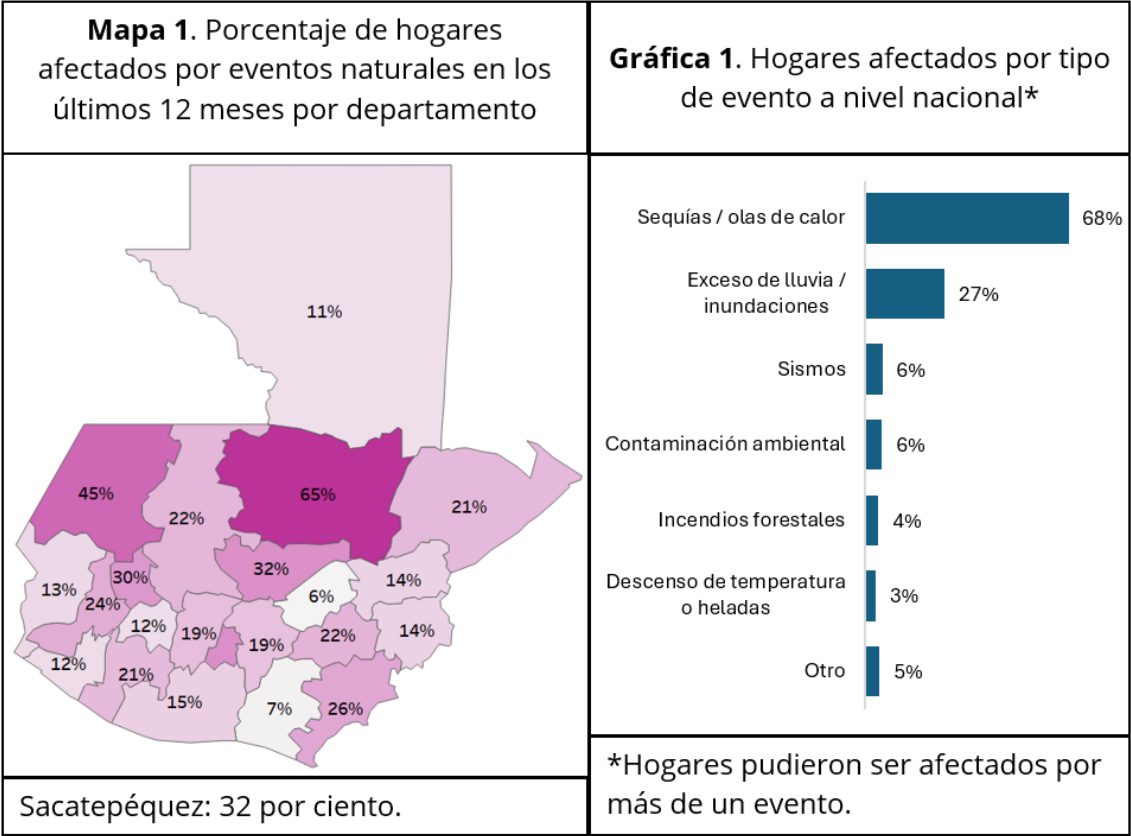
La vulnerabilidad estructural de ciertas poblaciones es objeto de programas institucionales regulares de protección social y seguridad alimentaria, pero de cobertura limitada, tales como: Hambre Estacional, Alimentos por Acciones, Transferencias Monetarias Condicionadas y Bono Social, entre otros, para grupos vulnerables específicos (CODI, PNUD/PMA/UNICEF/ UNFPA, 2019).

Un sistema de protección social fuerte, con un papel central para responder a emergencias, significa que también invierte en la prevención (sistemas de alerta temprana), en la gestión del riesgo y la respuesta a los desastres para no depender de la asistencia humanitaria de la cooperación (Protección social reactiva frente a emergencias en América Latina y el Caribe, WFP/Oxford Policy Management, 2017).



II. IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Aproximadamente 1 de cada 4 hogares guatemaltecos (24 por ciento o 925 mil hogares) fue afectado por algún evento climático, ambiental o geofísico en los 12 meses previo a ser entrevistados. Los departamentos con una frecuencia más alta de afectación son Alta Verapaz (65 por ciento), Huehuetenango (45 por ciento), Baja Verapaz y Sacatepéquez (32 por ciento). En el área rural un mayor porcentaje de hogares reportó ser afectado (27 por ciento)

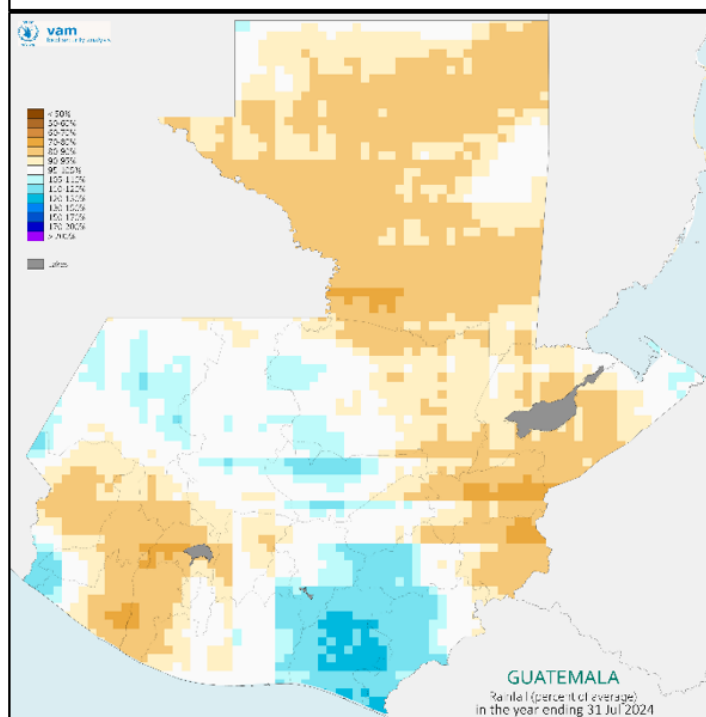


que en áreas urbanas (21 por ciento). Por población, los hogares indígenas tienden a ser más afectados que los mestizos o ladinos, con 32 de cada 100 siendo afectados (equivalente a 416 mil hogares) frente a 19 de cada 100 (509 mil hogares), principalmente en el caso de la población Q’eqchi’ con 59 de cada 100 hogares (137 mil hogares, los cuales se concentran en los departamentos de Alta Verapaz, Petén e Izabal¹).

De los hogares que fueron impactados por algún evento, 68 por ciento respondió ser afectado por sequías u olas de calor, y un 27 por ciento por excesos de lluvia, inundaciones o desbordamiento de ríos u otros cuerpos de agua. Estos eventos responden a la incidencia del fenómeno de El Niño, cuya temporada inició en julio de 2023 y terminó aproximadamente en abril de 2024 (WFP y ACH, 2024), en el contexto mundial “del cambio climático [originado por el ser humano], que provoca un aumento de las temperaturas mundiales, exacerba los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, y altera la configuración de las temperaturas y las precipitaciones estacionales” (OMM, 2024). Como consecuencia de estos fenómenos, en Guatemala se registraron sequías prolongadas y patrones erráticos de precipitación, lo que incide en un doble impacto de escasez tanto como exceso de agua, lo cual coloca presión sobre los cultivos comerciales (para los que se contrata a jornales agrícolas), los granos básicos y las hortalizas de pequeños agricultores

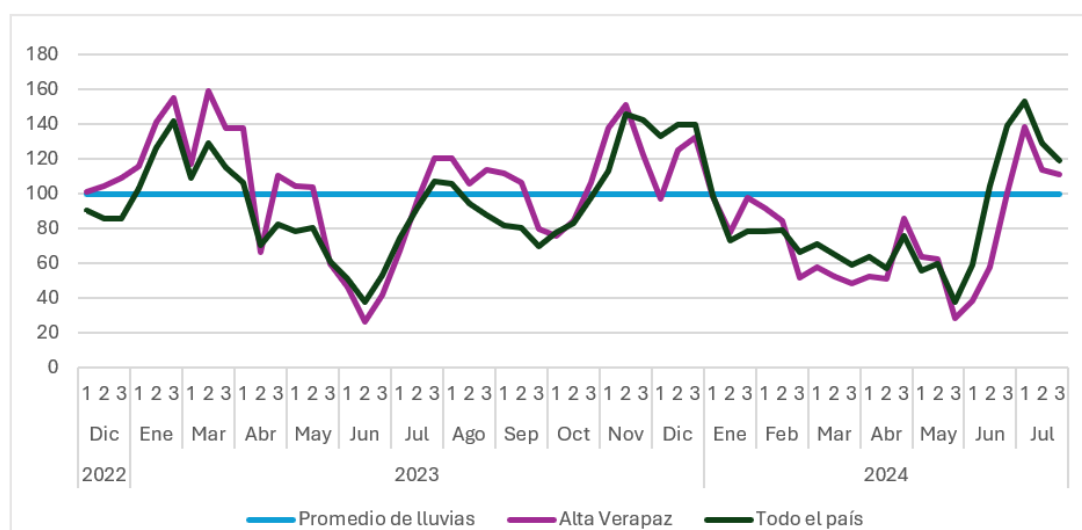
¹ De acuerdo con el Censo 2018, el 70 por ciento de los hogares Q’eqchi’ se encuentran en Alta Verapaz, 12 por ciento en Petén y 8 por ciento en Izabal.

Mapa 2. Anomalía en la precipitación anual (Julio 2024) en Guatemala



En el mapa 2 se muestra la precipitación anual (1 de agosto 2023 a 31 de julio 2024) relativa al promedio histórico, y en ella se muestran áreas que recibieron menos lluvias, incluso algunas llegando a solo tener entre 70 y 80 por ciento de lo que normalmente reciben: Chiquimula² y Zacapa en la región oriente; Sololá en el occidente, Suchitepéquez y Retalhuleu en suroccidente. En otros departamentos donde el promedio anual de precipitaciones es similar al de otros años como Alta Verapaz o Huehuetenango, si bien pareciera que los hogares no sufrieron alteraciones climáticas sustanciales, al analizar la tendencia a lo largo del tiempo, se observan patrones de escasez seguidos y picos súbitos de lluvias muy anómalos, comparados con las dinámicas estacionales históricas. En la gráfica 2 se muestra, por ejemplo, que en el departamento de Alta Verapaz en el mes de junio de 2023 la precipitación llegó a ser menor a una tercera parte de lo normal y que lo mismo volvió a suceder en junio 2024, afectando la siembra de primera en ambos años, pero luego en julio de 2024 hubo una precipitación de hasta 40 por ciento por encima de lo regular.

Gráfica 2. Cantidad de precipitación por decada (promedio móvil de un mes) como porcentaje del promedio histórico. Guatemala (país) y departamento de Alta Verapaz. Diciembre de 2022 a julio 2024³.



Esta afectación de sequía y eventos hidrometeorológicos se relacionan con la disponibilidad de agua y consecuentemente con la incidencia de enfermedades diarreicas que inciden sobre el aprovechamiento biológico de los alimentos. Al preguntar a los hogares sobre su percepción de la disponibilidad de agua para consumo en el último año, a nivel nacional 57

² Destacando a los municipios de Camotán, Jocotán y Olopa, en los que reside la población maya Ch'orti'.

³ Información disponible en [WFP Dataviz](https://data.wfp.org/).

por ciento respondieron que ha disminuido. Este porcentaje crece a 81 en Alta Verapaz⁴, 80 en Izabal, 72 en Chiquimula, 70 en Baja Verapaz y 68 en Quiché, lo que supone un costo más elevado para que los hogares adquieran agua de una fuente segura.

Además, la afectación por sequía o exceso de lluvia tiene un impacto directo sobre los medios de vida. Por ejemplo, en la gráfica 2 también se muestra cómo hubo un retraso en la época lluvia⁵ tanto en los años 2023 como 2024 (con los niveles de precipitación estando por debajo del promedio en mayo y junio y estos alcanzando a los niveles promedio hasta el mes de julio), lo que provocó la pérdida de semillas sembradas (FEWSNET, 2024)⁶. De los hogares afectados por algún evento en los últimos 12 meses, 46 por ciento reportó que este ocasionó mucho daño a sus medios de vida, impidiendo trabajar o recibir ingresos durante un determinado período. Inclusive, el 28 por ciento reportó que los daños o pérdidas en la producción pecuaria fue un impacto principal, vislumbrando como los hogares con estas fuentes de ingresos son muy vulnerables ante sequías y exceso de lluvia. El segundo impacto que más se mencionó es el de daños vinculados a la infraestructura pública vial, transporte, educación y salud (20 por ciento), el cual no solo implica una privación a servicios básicos, sino que también repercute en actividades económicas como el comercio, turismo o actividades de manufactura, y que al mismo tiempo aumenta los costos de alimentos y otros bienes y servicios, limitando el acceso económico a los alimentos.

En una medida similar a los daños a la infraestructura pública, los hogares afectados también mencionaron daños a la vivienda (20 por ciento) y daño personal (19) como impactos ocasionados por los eventos. Este tipo de daños se vinculan con desastres como las inundaciones y crecidas repentinas de ríos provocados por exceso de lluvias y los deslizamientos provocados por la saturación de agua en los suelos, la tala de árboles o incendios forestales.



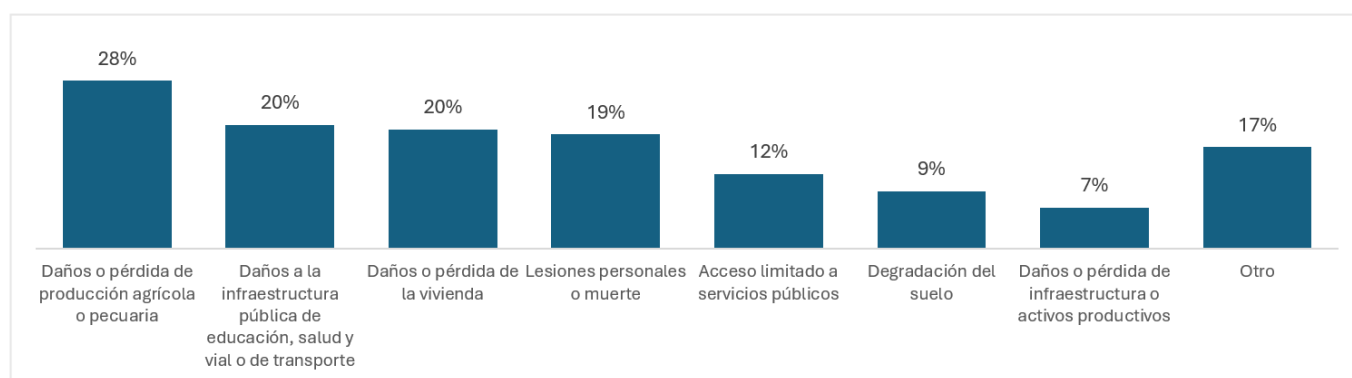
⁴ 78 por ciento de los hogares Q'eqchi' perciben un decremento en la disponibilidad de agua. Los hogares indígenas, en promedio, tienen esta percepción en el 61 por ciento de los casos mientras que los hogares mestizos la tienen en el 55 por ciento de los casos.

⁵ Según los calendarios estacionales, la época lluviosa históricamente inicia en mayo. Por ejemplo, ver el documento de [Épocas de Siembra y Cosecha en Guatemala en condiciones normales del MAGA](#).

⁶ “En 2024, la extensión del período seco y el retardo en el establecimiento de las lluvias esperadas en abril y mayo impidió las siembras de granos básicos de Primera 2024 en los tiempos usuales. Este retraso ha significado la pérdida de semilla, la elevación de los costos de producción, la decisión de no sembrar o hacerlo en una menor área, la prolongación de este primer periodo agrícola que se traslaparía con el de Postre. Esta situación perjudicaría los rendimientos finales y la disponibilidad de granos propios para el consumo de los hogares. La cantidad de días de retraso para la siembra varió según la zona geográfica del país” (FEWSNET, 2024).

La gestión de estos desastres es vital para mitigar daños irreversibles a las personas y comunidades afectadas. Aproximadamente 19 por ciento de los hogares tuvieron acceso a un albergue durante la afectación o emergencia⁷, pero de ellos más de la mitad fue algún albergue no oficial (10 por ciento) o se auto albergaron con familiares y/o amigos (3 por ciento), mientras que solo 5 por ciento tuvieron acceso a un albergue oficial, aparentando que existe un déficit de preparación anticipada de albergues oficiales ante emergencias. Además, un 5 por ciento de los hogares impactados en los últimos 12 meses recibió algún tipo de asistencia posterior al evento, la mayoría de las veces dentro de las primeras 24 horas tras el suceso (3 por ciento de los hogares), pero en otros casos la asistencia recibida demoró hasta más de 2 semanas. Con respecto a alertas o comunicación previa al suceso, solo el 14 por ciento de hogares afectados por exceso de lluvias, inundación, deslizamiento u otro evento manifestó ser informado previo a que ocurrieran, por lo que, si bien se genera esta información a nivel de mesas técnicas de entidades centrales, parece que esta no se traslada oportunamente a las comunidades con riesgo a desastres. En cuanto a hogares afectados por sequía, solo el 8 por ciento manifestó estar informado de que esta sucedería, lo que sugiere que los mecanismos de comunicación y alerta temprana ante fenómenos hidrometeorológicos y sequías⁸ pueden fortalecerse.

Gráfica 3. Principales impactos sufridos por los hogares afectados por algún evento en los últimos 12 meses*



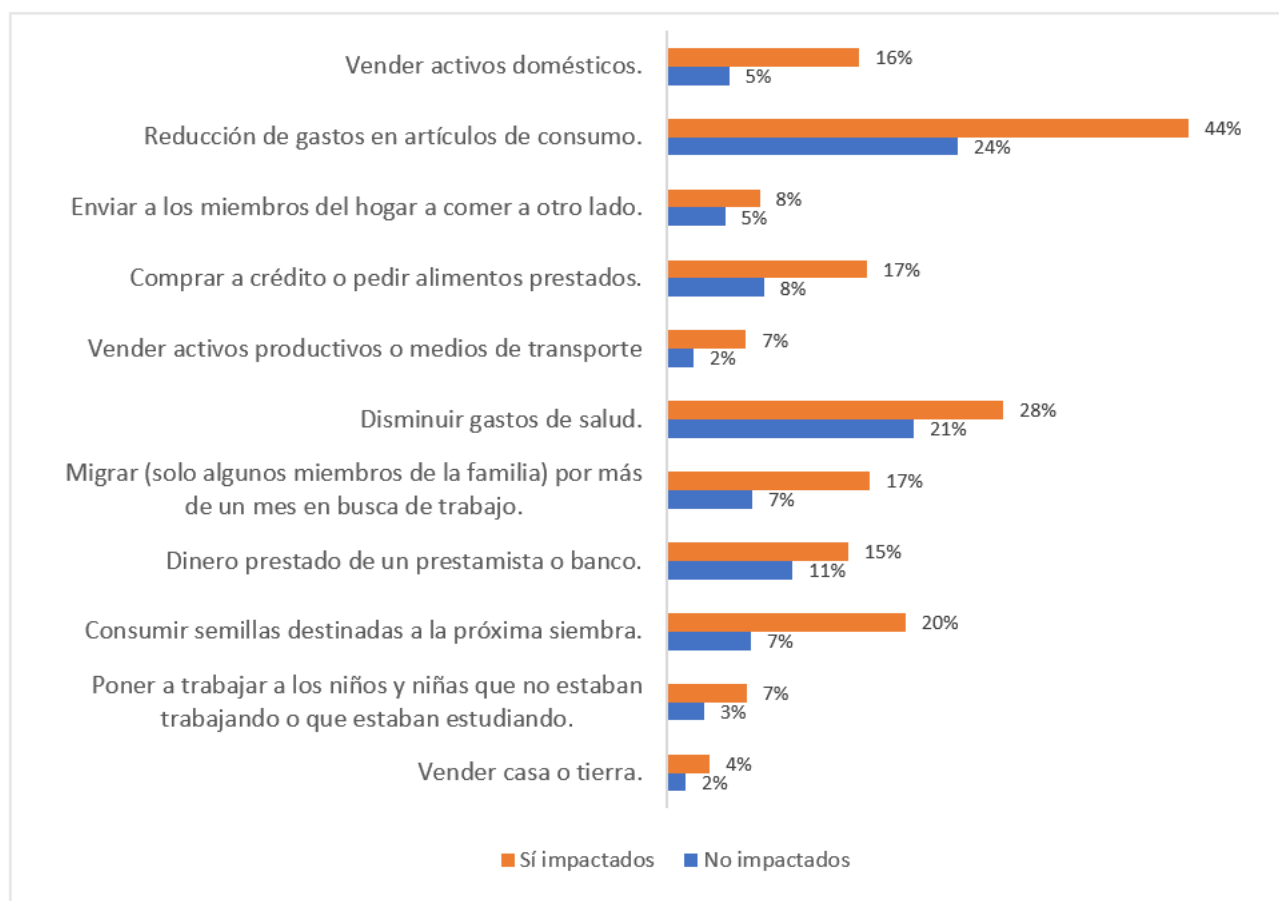
*Nota: Hogares podrían declarar hasta tres tipos de impactos

Los hogares que manifestaron haber sido afectados por algún evento tienen una mayor frecuencia de uso de estrategias de afrontamiento de medios de vida (51 por ciento emplea estrategias de emergencia o crisis comparados con 36 por ciento cuando no han sido afectados). Este aumento de estrategias revela que, para hogares impactados por choques como sequías o excesos de lluvia, existe un agudizamiento de una crisis alimentaria y que estos entonces han pasado con mayor frecuencia a sacrificar su capacidad productiva futura (venta de activos productivos o transporte (7%), consumo de semillas para la próxima siembra (20%)), a sacrificar el goce de derechos de niños o niñas como la educación (7%) o incluso a sacrificar bienes esenciales como su propia vivienda (4%). Inclusive, la estrategia de afrontamiento de migrar en busca de empleo se potencia al ser impactados por algún tipo de evento (pasa de 7 a 17 por ciento), lo que parece dibujar una relación entre la afectación de eventos (agudizados por el cambio climático), la prevalencia de inseguridad alimentaria y el desplazamiento de familias guatemaltecas.

⁷ Se excluye a hogares cuya única afectación fue sequía de este conteo. El uso de albergues se habilitó más en caso de exceso de lluvia o inundaciones, así como de deslizamientos o movimientos de masas de tierra.

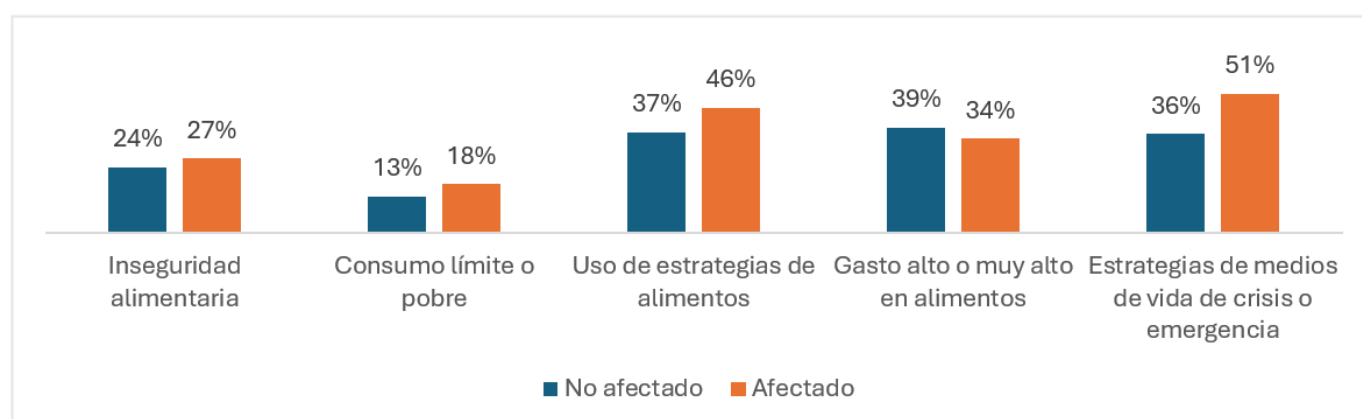
⁸ Un desafío para ello es que el costo de tomar medidas para mitigar los impactos de sequías (por ejemplo, el atrasar la siembra de granos básicos) puede ser muy alto para hogares, y por ende la transmisión de alertas y recomendaciones de acción requieren un alto grado de credibilidad y representan un costo reputacional para entidades públicas, por lo que se recomienda evaluar mecanismos más pertinentes y viables para comunicar esta información.

Gráfica 4. Uso de estrategias de afrontamiento de medios de vida en hogares afectados y no afectados por eventos naturales en los últimos 12 meses.



Al mismo tiempo que experimentan el aumento en el uso de estrategias para afrontar medios de vida erosionados, los hogares impactados tienen mayores índices de inseguridad alimentaria debido al uso frecuente de estrategias de afrontamiento de alimentos y a un consumo de alimentos más pobre, aunque también existe una aparente mejora en la dimensión de porcentaje de gasto en alimentos (gráfica 5). Esta reducción en el gasto a alimentos se atribuye a la necesidad de priorizar otros rubros de gasto como la reparación de vivienda, invertir en actividades para el restablecimiento de medios de vida o la recuperación de activos al ser impactados por un desastre, lo que repercute sobre la cantidad y calidad de los alimentos consumidos.

Gráfica 5. Indicadores de seguridad alimentaria en hogares afectados y no afectados por eventos naturales a nivel nacional en los últimos 12 meses

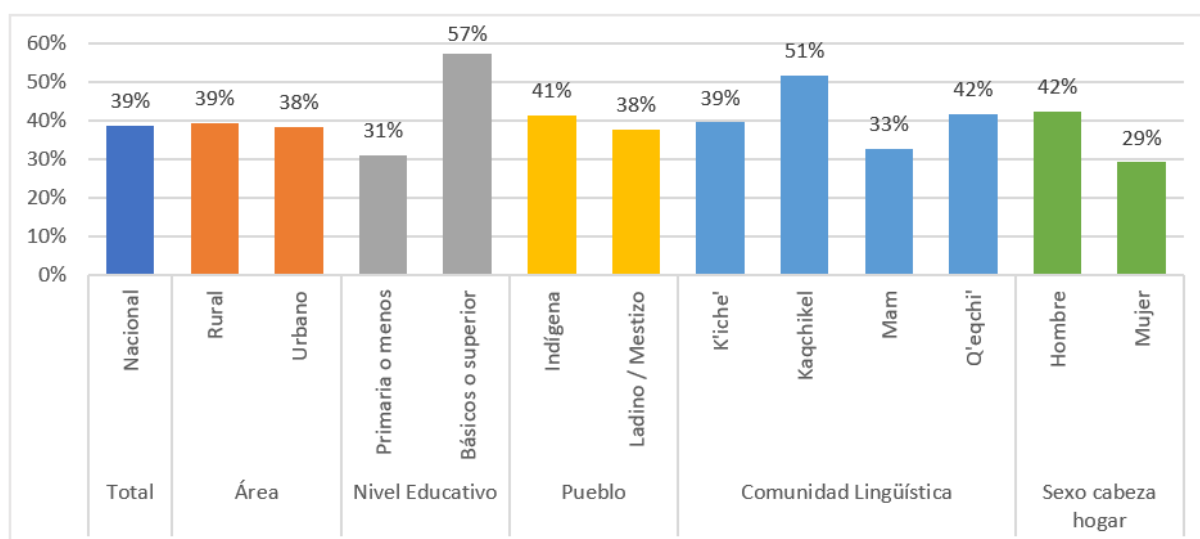


III. GESTIÓN DEL RIESGO A DESASTRES

Un pilar de la gestión de riesgo de desastres para prevenir, reducir y controlar las amenazas es la comunicación oportuna y pertinente de potenciales eventos climáticos, ambientales y geofísicos. A pesar de que esta información es generada y difundida por instituciones, por ejemplo, CONRED e INSIVUMEH a través de boletines informativos y publicaciones en redes sociales⁹, a nivel nacional solo 39 por ciento de los hogares declaró tener acceso a este tipo de información. Esta brecha en el acceso de la información puede deberse a que los canales y productos de difusión no son óptimos para llegar a todos los hogares del país, por ejemplo, debido a brechas en el acceso a tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), por barreras de educación y comprensión de lenguaje o por desconocimiento de riesgos a desastres.

Existen desigualdades claras en este acceso a la información, tal como se muestran en la gráfica 6. La diferencia más grande se encuentra en el nivel educativo de la cabeza de cada hogar, ya que los hogares cuya cabeza tiene estudios básicos completos o un nivel superior tienen acceso a esta información en el 57 por ciento de los casos, contra los hogares cuyas cabezas tienen menos escolaridad, con solo 31. Otra diferencia sustancial en el acceso a información se da cuando la cabeza es hombre (42 por ciento) o mujer (29 por ciento), posiblemente debiéndose a brechas en el acceso a TICs así como a roles en cuanto a la seguridad y reducción de riesgo a amenazas. Aunque por área de residencia (rural o urbano) no existe una diferencia sustancial en la frecuencia, el hecho de que en áreas rurales los medios de vida (como la producción agropecuaria) son más vulnerables o que en estas existe una menor capacidad de respuesta gubernamental ante desastres, indica que en ellas debe fortalecerse esta comunicación para la prevención de emergencias.

Gráfica 6. Porcentaje de hogares que reportó tener acceso a información de eventos climáticos, ambientales o geofísicos

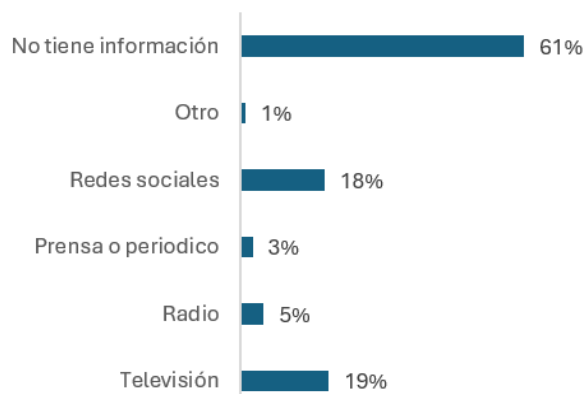


En las comunidades lingüísticas maya existen accesos diferenciados a información de eventos climáticos, ambientales y geofísicos. La Kaqchikel tiene el mayor acceso, con 52 de cada 100 hogares recibiendo información, a pesar de que esta es la que tuvo la menor frecuencia de afectación por algún evento en los últimos 12 meses (20 de cada 100). La Q'eqchi' tuvo la segunda mayor tasa de hogares que manifestaron recibir información

⁹ Por ejemplo, <https://conred.gob.gt/boletines-informativos/> Conred | Guatemala City | Facebook INSIVUMEH – Instituto nacional de sismología, vulcanología, meteorología e hidrología. INSIVUMEH (@insivumehgt) / X

(42 de cada 100) y es la más afectada en los últimos 12 meses por eventos como sequías y excesos de lluvia, mientras que la población Mam tiene el menor acceso, con solo 33 de cada 100 hogares recibiendo información, y tuvo una afectación media. Estas diferencias entre la frecuencia de afectación y la de recibir información resaltan el hecho que las estrategias para la preparación ante desastres deben ser diferenciadas por grupo étnico.

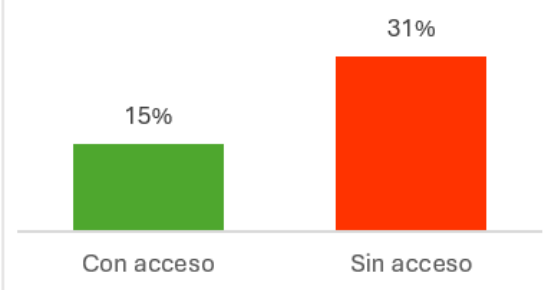
Gráfica 7. Hogares por el medio por el que reciben información de eventos



Los medios por los que los hogares reciben más información de eventos son la televisión (19 por ciento de los hogares) y las redes sociales (18 por ciento). Según la ESA2024, el 77 por ciento de los hogares a nivel nacional cuentan con un televisor, mientras que el 71 por ciento tiene algún teléfono móvil inteligente con acceso a internet. Esto implica que, si bien pueden fortalecerse los esfuerzos de difusión de información de eventos por estos medios para llegar a una mayor parte de la población, también pueden fortalecerse mecanismos alternativos para mantener informado al 29 por ciento de los hogares que no tienen acceso a teléfonos inteligentes ni a redes sociales.

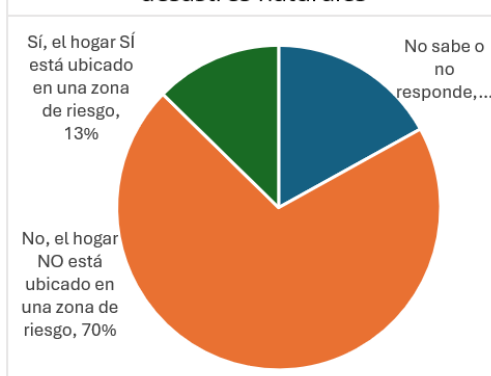
El estado de seguridad alimentaria y el acceso a información sobre eventos climáticos, ambientales y geofísicos están correlacionados. Tal como se muestra en la gráfica 8, el porcentaje de hogares que no tiene acceso a información en inseguridad alimentaria es de 31 por ciento, más que el doble que el porcentaje de hogares que sí tiene acceso a esa información (15 por ciento). La incidencia entre la seguridad alimentaria y la GIRRD es bidireccional. Los hogares que están en inseguridad alimentaria residen en áreas con mayor exposición a estos eventos (como inundaciones, deslizamientos y sequías), en condiciones más vulnerables (por ejemplo, materiales de vivienda más precarios, menores accesos a servicios de comunicación y fuentes de ingresos más susceptibles) y con más lejanía o dificultad de acceso físico para que entidades mitiguen y respondan a desastres. Al mismo tiempo, la afectación por desastres presenta choques que impactan directamente en la disponibilidad y el acceso a alimentos, lo que obliga a hogares a priorizar su supervivencia mínima sobre las necesidades esenciales (como salud o educación), e interrumpe procesos individuales y colectivos de desarrollo para mejorar sus condiciones de vida en el largo plazo.

Gráfica 8. Porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria por acceso a información de eventos



En este contexto, una oportunidad para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y de las condiciones de vida de las personas guatemaltecas es generar consciencia sobre los riesgos y amenazas de desastre que sus comunidades enfrentan y promover planes de preparación, mitigación y respuesta ante ellos. Un 70 por ciento de las personas entrevistadas indicó que su hogar no reside en una zona de riesgo a desastres, mientras que 13 por ciento afirmó que sí está en una zona de riesgo y 17 no sabe si lo está o no (gráfica 9). Los hogares que no están en una zona de riesgo o que desconocen si lo están acceden con menor frecuencia a

Gráfica 9. Hogares por si saben si están ubicados en una zona de riesgo a desastres naturales

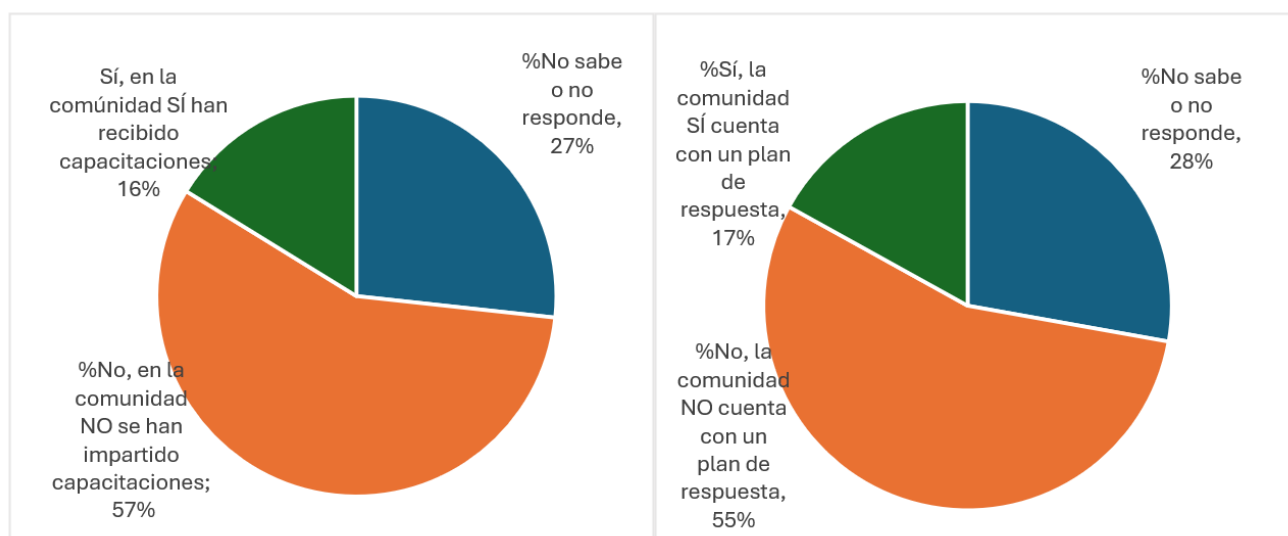


información de eventos climáticos, ambientales y geofísicos (36 por ciento, comparado con 55 por ciento en el caso de los hogares que sí perciben que están en una zona de riesgo), sugiriendo que otra razón por la que los hogares no acceden a esa información es porque no la consideran relevante. Sin embargo, considerando que Guatemala es un país con actividad sísmica frecuente¹⁰, que existen más de 10 mil poblados a nivel nacional con riesgo a inundaciones o deslizamientos¹¹ y que 301 de 340 municipios (89 por ciento) tienen riesgo medio, alto o muy alto a desastres (European Commission, 2021), es posible que los hogares ignoren cuáles son los riesgos a los que se enfrentan o que los estén normalizando debido

a que no han sido impactados en el pasado reciente. Por ende, una ruta de trabajo para mejorar la situación alimentaria en Guatemala podría ser la sensibilización sobre los riesgos a desastres - priorizando áreas con más desconocimiento y riesgo latente.

A las personas entrevistadas también se les preguntó si en su comunidad se han impartido capacitaciones sobre preparación ante emergencia (gráfica 10a) y si saben si en su comunidad cuenta con un plan de respuesta a emergencias (gráfica 10b). 16 y 17 por ciento de los hogares, respectivamente, manifestaron saber que en sus comunidades sí han recibido capacitaciones y sí tienen un plan de respuesta, mientras que 83 y 85 por ciento respondió que desconoce o aseguró que no existe un plan de respuesta ni capacitaciones de preparación de respuesta a desastres. En otras palabras, 5 de cada 6 hogares en Guatemala no tienen un plan de respuesta ante desastres, lo que es congruente con los hogares que perciben que no están ubicados en zonas de riesgo a desastre (los hogares que no perciben estar en riesgo tienen menor probabilidad de tener un plan de respuesta o haber recibido alguna capacitación¹²).

Gráfica 10. Porcentaje de hogares que a) han recibido capacitaciones en preparación de respuesta ante un evento o emergencia, y b) saben si su comunidad cuenta con un plan de respuesta ante una emergencia, a nivel nacional



¹⁰ [RECOMENDACIONES ANTE ACTIVIDAD SÍSMICA » CONRED](#)

¹¹ [Boletín Informativo No. 4275 - A nivel nacional: 10.051 puntos de riesgo a deslizamientos e inundaciones - Guatemala | ReliefWeb](#)

¹² De los hogares que perciben estar ubicados en una zona de riesgo, 28 por ciento manifestaron que su comunidad tiene un plan de respuesta comparado con 15 por ciento cuando perciben no estar en zona de riesgo o desconocen si lo están. Similarmente, cuando se perciben estar en zona de riesgo, han recibido capacitaciones para la preparación ante emergencias con más frecuencia (21 por ciento contra 16 por ciento).

IV. REDES DE PROTECCIÓN SOCIAL

“Las redes de protección social son esenciales para la reducción sostenida de la vulnerabilidad de las poblaciones y pueden mitigar los impactos de los choques sobre la población” (NORCAP, 2024:7), por lo que juegan un rol crucial tanto en la gestión de desastres como para garantizar la seguridad alimentaria de la población.

No obstante, el alcance de estas redes es limitado, solo el 7 por ciento de los hogares a nivel nacional (equivale a 289 mil) recibió asistencia en efectivo o en especie en los últimos 6 meses de alguna fuente (incluyendo gobierno, ONGs, agencias de la ONU, organizaciones religiosas, familiares, amigos o su comunidad)¹³. Al desagregar por área geográfica, los hogares urbanos recibieron asistencia con más frecuencia que los rurales (9 por ciento frente a 5 por ciento), y del total de hogares que recibieron algún tipo de asistencia, 73 por ciento residen en un área urbana. Por pueblo de pertenencia, los hogares mestizos tienen el doble de probabilidad de haber recibido asistencia (9 por ciento) que los hogares indígenas (4 por ciento). Esto refleja que la población indígena y la población que reside en áreas rurales tienen mayores barreras para acceder a redes de protección, lo que a su vez profundiza las desigualdades socioeconómicas, esta población experimenta los mayores índices de pobreza y afectación por desastres naturales¹⁴. Los hogares que indicaron ser impactados por algún evento climático, ambiental o geofísico en los últimos 12 meses reportaron ser asistidos en el 8 por ciento de los casos (y no ser asistidos en el 92 por ciento).

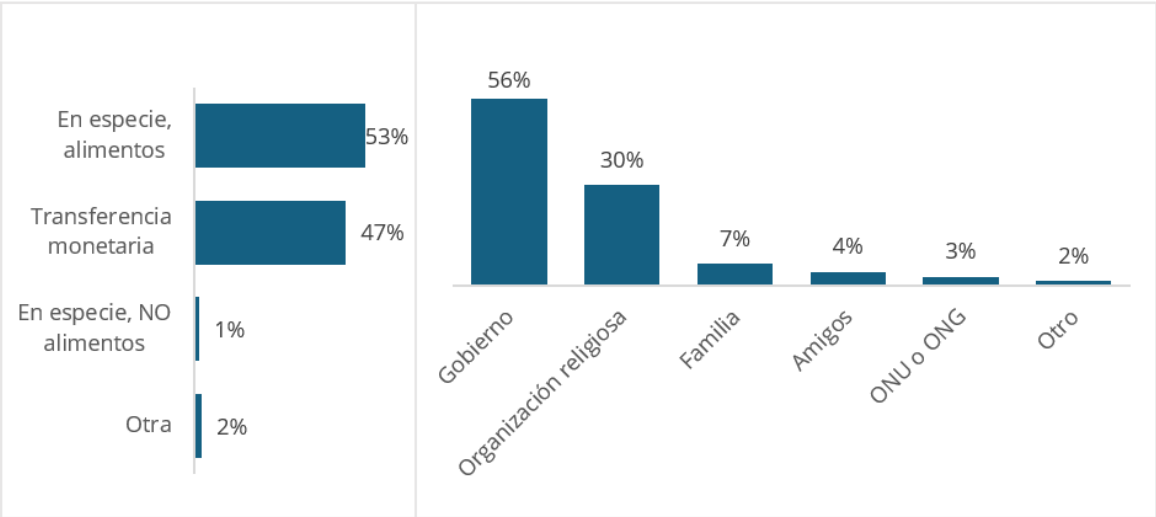
Al analizar por el grado de seguridad alimentaria, el 18 por ciento de los hogares inseguros y 3 por ciento de los hogares seguros recibieron asistencia. Esto equivale a que el 63 por ciento de todos los hogares que recibieron asistencia se encuentran en inseguridad alimentaria, mientras que 28 de ellos están en seguridad alimentaria marginal y 8 por ciento en seguridad alimentaria. Por lo tanto, si bien existe una falta de cobertura de asistencia para la gran mayoría de hogares (el 82 por ciento de los hogares en inseguridad alimentaria declararon no recibir en los 6 meses previos a la encuesta), la asistencia sí se brinda particularmente a hogares con necesidades alimentarias, especialmente aquellos mestizos y que residen en áreas urbanas. Estos hallazgos sugieren que existe un desafío en las redes de asistencia y protección social no vinculado a la focalización, sino más bien en lograr una mayor cobertura en el territorio nacional.

La asistencia que los hogares reportaron fue principalmente en la forma de alimentos en especie (53 por ciento), resaltando el hecho que la asistencia reportada se vincula principalmente a las necesidades alimentarias. A esta le siguen las transferencias monetarias (47 por ciento), con escasas menciones de asistencia en especie distinta a alimentos (1 por ciento).

¹³ La pregunta durante la entrevista fue: *¿Su hogar ha recibido asistencia (en efectivo o en especie) en los últimos 6 meses de alguna fuente, incluyendo agencias de la ONU u ONG's, el gobierno, familia, amigos, la comunidad u organizaciones religiosas?* Si bien no se profundizó sobre qué es lo que las personas entrevistadas entienden por ‘asistencia’, se presupone que cualquier programa de asistencia por parte de gobierno central o local, cualquier beneficio por parte de alguna organización o entidad no gubernamental, o cualquier transferencia de dinero o en especie por parte de familiares, amistades o personas de su comunidad sería entendido como asistencia media vez esta tenga un impacto positivo directo sobre la situación alimentaria o la satisfacción de necesidades esenciales de su hogar y media vez esta no se considere regular ni universal. Las remesas, por ejemplo, se presupone que no son consideradas como asistencia sino como una fuente de ingresos regular cuando estas son enviadas de forma periódica por algún familiar que emigró.

¹⁴ Según la ENCOVI 2023 (INE, 2024), el 75 por ciento de la población indígena está bajo el umbral de pobreza comparado con el 45 por ciento de la población mestiza, mientras que el 66 por ciento de la población rural está en pobreza comparado con el 46 por ciento de la población urbana. Según datos de la ESA 2024 (sección II), 32 por ciento de los hogares indígenas fueron afectados por algún evento climático, ambiental o geofísico en los últimos 12 meses comparado con el 19 por ciento de los hogares mestizos.

Gráfica 11. Hogares que recibieron asistencia en los últimos 6 meses (a) por el tipo de asistencia que recibieron, y (b) por quién les brindó la asistencia*



Nota: en ambos incisos, los hogares podían indicar más de una opción.

Por otro lado, el gobierno es la fuente de la asistencia más frecuente (56 por ciento, lo que equivale a que 4 de cada 100 hogares a nivel nacional manifestó haber sido asistido por el gobierno), sin mucha variación por el área en que residen ni al pueblo que pertenecen¹⁵. La segunda fuente de asistencia más frecuente a nivel nacional son organizaciones religiosas, con 30 por ciento de los hogares asistidos. La asistencia por parte de organizaciones religiosas fue más frecuente para los hogares mestizos (35 por ciento) que para los indígenas (10 por ciento), y esa podría ser una razón por la que los hogares mestizos reportaron ser asistidos con mayor frecuencia. La asistencia de parte de familiares y amistades (7 y 4 por ciento), en cambio, fue más frecuentes en el caso de hogares rurales.



¹⁵ El porcentaje de los hogares asistidos que manifestó recibir asistencia por el gobierno varía entre 55 y 62 por ciento al desagregar a los hogares urbanos, rurales, mestizos e indígenas.

V. SEGURIDAD Y DESPLAZAMIENTO

a. Seguridad

Gráfica 12. Hogares que se sienten inseguros en su entorno, por las razones principales por las que se sienten así*



*Los hogares podían indicar hasta tres motivos por los que se sienten inseguros.

En la ESA 2024, solo 6 de cada 100 personas entrevistadas indicaron que las personas en su hogar se sienten inseguras en el entorno en el que viven, mientras que las otras 94 se perciben seguras. En las áreas urbanas, el porcentaje que se siente inseguro se eleva a 7 y en las áreas rurales baja a 4. Por el sexo de quien responde la encuesta, hombres declararon sentirse inseguros con mayor probabilidad que mujeres (8 por ciento frente a 5). Las razones por las que estos hogares se sienten más inseguros son la ausencia de medidas de seguridad, delincuencia y/o actividad de pandillas (77 por ciento), el impacto del cambio climático y/o desastres naturales (37 por ciento, como deslizamientos, inundaciones y sequías) y violencia física (11 por ciento, contando por homicidios, agresiones, lesiones, violencia sexual, etc.). En menor medida, algunos hogares mencionaron la violación de derechos de vivienda, tierra y

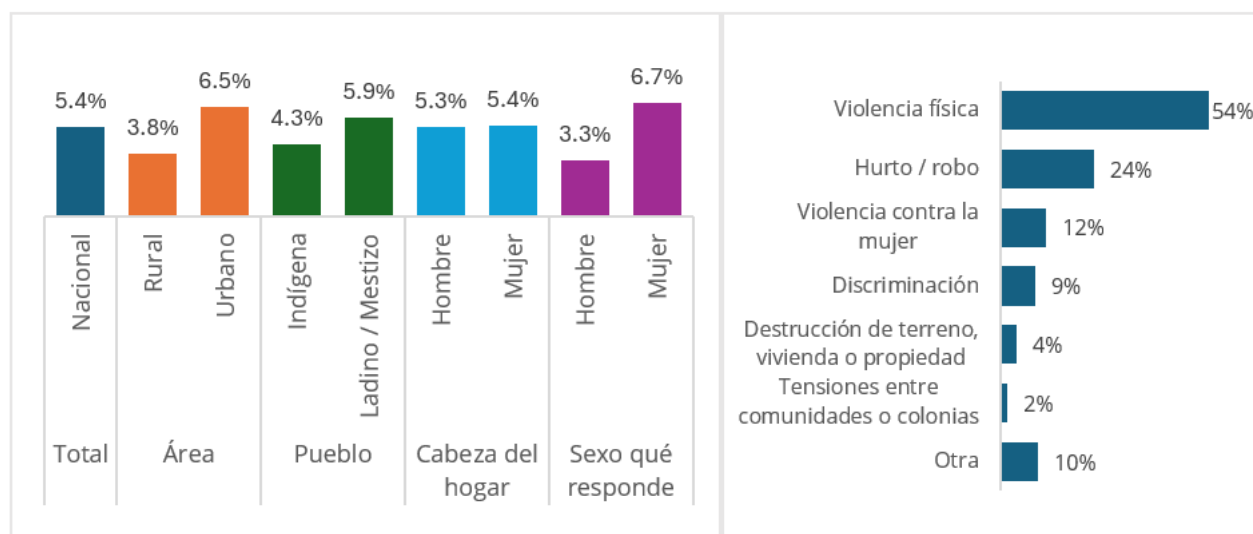
propiedad (como desalojos forzados), violencia psicológica (incluyendo extorsiones y amenazas) y discriminación como razones para esta percepción de inseguridad.

En cuanto haber sufrido hechos de inseguridad o violencia, 5 de cada 100 personas encuestadas (equivale a 210 mil hogares) respondió que alguien de su hogar sufrió algún evento de violencia o inseguridad en los últimos 12 meses (gráfica 13a). Al igual que para la percepción de inseguridad, se reportaron más hechos sufridos en el último año en áreas urbanas que en rurales y más eventos fueron reportados por población mestiza que indígena. A diferencia que en el caso de la percepción de inseguridad, los eventos fueron reportados con mayor frecuencia por mujeres que hombres (independientemente del sexo de la cabeza del hogar) lo que podría deberse a una mayor probabilidad de ser víctimas de eventos violentos (particularmente por violencia de género), tanto fuera como dentro del hogar (que pueden estar invisibilizados bajo el método de recolección de información a través de entrevistas de hogares), o por una menor normalización de estos eventos violentos.

En la gráfica 13b se muestra que los tipos de eventos que los hogares reportaron haber sufrido¹⁶ con mayor frecuencia en los últimos 12 meses son: violencia física, incluyendo homicidios, agresiones, robo con armas y violencia sexual (54 por ciento, 113 mil hogares de los 210 mil); hurto o robo (24 por ciento); violencia contra la mujer (física, psicológica, sexual o de otras formas, 12 por ciento); y alguna forma de discriminación (9 por ciento). Entre las respuestas de eventos sufridos en los últimos 12 meses, también se menciona la destrucción del terreno o vivienda y desalojo forzado (4 por ciento, equivalente a aproximadamente 8,500 hogares), potencialmente desplazando a familias y dejándolas en una grave situación de emergencia humanitaria (CIDH, 2018), incluyendo la privación de alimentos.

¹⁶ Por hogar podían seleccionarse múltiples opciones de tipos de eventos sufridos.

Gráfica 13. a) Eventos de inseguridad o violencia experimentados por alguna persona dentro del hogar en los 2 meses previos a la entrevista, y b) Tipo de evento o suceso sufrido por la persona del hogar¹⁷



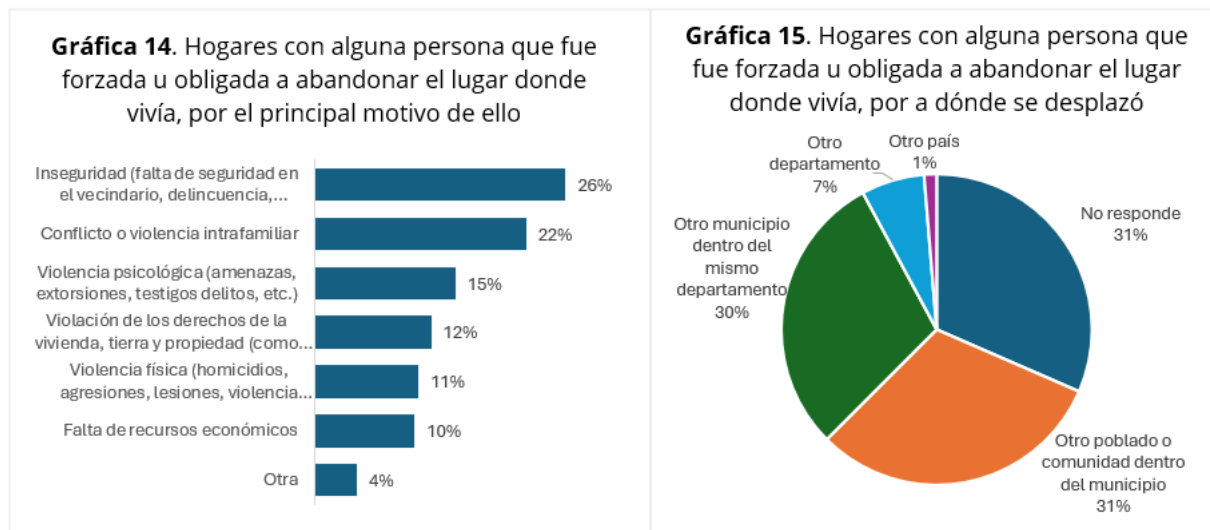
Dado que en otros contextos se ha observado una relación entre inseguridad, violencia e inseguridad alimentaria¹⁸, en la ESA 2024 se incluyó un módulo de seguridad para determinar si en Guatemala el haber sufrido algún evento de inseguridad o el sentirse inseguro o insegura está relacionada con mayor vulnerabilidad a inseguridad alimentaria. Sin embargo, no se encontró evidencia significativa que vincule a estos fenómenos. Los hogares que respondieron haber sufrido algún evento en los últimos 12 meses se concentran en zonas urbanas y estos suelen tener menores índices de pobreza y medios de vida más resilientes, por lo que en promedio no se ve que estos tengan mayores índices de inseguridad alimentaria que el resto. Si el objetivo es profundizar sobre la relación de inseguridad alimentaria y la inseguridad o violencia, se recomienda una investigación dirigida específicamente a poblados con altos índices de inseguridad y/o alta prevalencia de algún tipo de violencia o fenómeno particular, con un enfoque cualitativo y cuantitativo y con registros longitudinales de sucesos e indicadores de inseguridad alimentaria.

b. Desplazamiento forzado

Aproximadamente en uno de cada 100 hogares (lo que representa 30,526 hogares a nivel nacional) tiene una persona que, en los 12 meses previo a ser entrevistado, fue forzada u obligada a abandonar el lugar donde vivía. De estos hogares, el principal motivo del desplazamiento forzado fue la inseguridad por delincuencia o actividad de pandillas criminales (26 por ciento de los casos), seguido por conflictos o violencia intrafamiliar con 22 por ciento (en lo que cabe destacar a la violencia basada en género y al alcoholismo como razones citadas). La violencia psicológica, principalmente por intentos de extorsión o amenazas, fue la razón citada por el 15 por ciento de los casos y, el desalojo u otras violaciones al derecho de la vivienda o tierra por otro 12 por ciento.

¹⁷ Estos porcentajes se calculan a partir de los hogares que sí reportaron haber sufrido algún evento de violencia o inseguridad.

¹⁸ Por ejemplo, hogares en Nigeria y Estados Unidos que sufren crímenes o que están en un entorno inseguro son más propensos a estar en inseguridad alimentaria (Kaila y Azad, 2023; DiFiore et al., 2022) y que reducciones en la violencia basada en género a través de enfoques mejoran el acceso, la producción y el consumo de alimentos de las familias en países de África Central y Occidental (CARE, 2022). Al mismo tiempo, la inseguridad alimentaria puede intensificar las amenazas de conflictos por factores políticos, sociales y demográficos (Brinkman y Hendrix, 2011); aumenta la probabilidad de que ocurran actos criminales o maltrato dentro del hogar, particularmente hacia niñas y niños (Bloom, 2024); y aumenta las tasas de crímenes violentos y no violentos en comunidades (Singleton, 2024; Entas et al, 2024).



Al preguntar sobre el lugar al que fueron desplazadas las personas de estos hogares, 31 por ciento no respondió, mientras que 31 por ciento indicó que se quedó dentro del mismo municipio, 30 por ciento salió de su municipio, pero se quedó dentro del departamento, 7 por ciento salió de su departamento y uno por ciento salió del país. Es posible que con esta metodología no se logre estimar la totalidad de hogares desplazados¹⁹, pero estos hallazgos reflejan que al menos 20 mil hogares fueron desplazados forzosamente dentro del país solo en los 12 meses previo a la encuesta.

Con respecto a la cifra del desplazamiento forzado (0.8 por ciento de los hogares), cabe destacar el hecho que, si se mantuviera la misma tasa de desplazamiento, en una década 8 por ciento de los hogares tendrían por lo menos algún miembro que ha sido forzado a desplazarse. Esto no solo tendría importantes consecuencias para la composición demográfica de las comunidades, sino que también implicaría una crisis humanitaria para personas vulnerables en situación de movilidad, y también tendría un impacto considerable sobre las actividades económicas y la satisfacción de necesidades alimentarias y otras esenciales de personas en las comunidades que se ven forzados a abandonar. Otra consideración de esta cifra es que potencialmente implique una subestimación: 1.1 por ciento de los hogares optaron por no responder a la pregunta²⁰ y es posible que otras personas entrevistadas hayan respondido de forma negativa, para evitar hablar de un tema potencialmente estigmatizante como lo es el desplazamiento forzado²¹.

Además, de las 6,640 entrevistas realizadas en la ESA 2024, ninguna se administró a alguna persona que no se identificara como guatemalteca (a pesar de que esta era una opción permitida dentro del instrumento de recolección de información), por lo que no se refleja la información de personas internacionales desplazadas que se encuentran dentro de Guatemala. De la misma forma, el marco muestral de la encuesta consiste en hogares que habitan viviendas de lugares poblados del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INE, 2018) y, por ende, no se tomó información de población guatemalteca o internacional en situación de movilidad, alojándose en refugios colectivos, improvisados o en ruta. Sin embargo, el monitoreo regional de movimientos mixtos de ACNUR, WFP y UNICEF²² reveló que en el primer semestre del 2024 se reportaron más de 90 mil encuentros de personas guatemaltecas en la frontera Sur de Estados Unidos (la nacionalidad más frecuente después de la mexicana) y que Guatemala continúa siendo parte de la ruta de población desplazada

¹⁹ Un Por ejemplo, los hogares en los que todos sus miembros están en situación de movilidad o fuera de Guatemala no están representados.

²⁰ ¿Usted o alguien del hogar ha sido forzado u obligado a abandonar su hogar en los últimos 12 meses?

²¹ Aproximadamente 2 por ciento de los hogares (80 mil hogares) manifestó haber vendido su casa o tierra o el haber agotado esta estrategia previamente debido a la falta de alimentos o de dinero para comprar comida, lo que podría dar una cota superior para este desplazamiento forzado.

²² Ver: <https://data.unhcr.org/en/documents/details/111444>

de otros países de Centroamérica y Sudamérica, para llegar a México y Estados Unidos. Estas poblaciones son desplazadas de su país de origen, principalmente por falta de acceso a empleo o ingresos (70 por ciento); por miedo a la situación general de inseguridad o violencia (46 por ciento); por ser víctimas de violencia (29 por ciento); por falta de alimentos (27 por ciento); y por otras razones (19 por ciento).

Este monitoreo revela que para las personas en situación de movilidad que están en Guatemala, 87 por ciento citan que “conseguir alimentos para su familia” es su principal necesidad, y el 91 por ciento reportó tener algún problema de protección (como robos, estafas, violencia física o abuso o extorsiones), resaltando la alta vulnerabilidad y necesidades alimentarias que tiene esta población mientras transita en el país.

VI. HALLAZGOS CLAVE

- Aproximadamente uno de cada cuatro hogares guatemaltecos (24 por ciento, equivalente a 925 mil hogares) fue afectado por algún evento climático, ambiental o geofísico en los 12 meses previo a ser entrevistados. De estos, 68 respondió ser afectado por sequías u olas de calor, y un 27 por ciento por excesos de lluvia, inundaciones, desbordamiento de ríos u otros cuerpos de agua. Los departamentos más afectados son Alta Verapaz (65 por ciento), Huehuetenango (45 por ciento), Baja Verapaz y Sacatepéquez (32 por ciento). Un mayor porcentaje de hogares indígenas fueron afectados que mestizos, particularmente en el caso de los hogares Q’eqchi’ (59 de cada 100).
- La afectación por eventos climáticos, ambientales o geofísicos tiene un impacto claro sobre la seguridad alimentaria. Los hogares que manifestaron haber sido impactados por algún evento tienen mayor probabilidad de utilizar alguna estrategia de afrontamiento de medios de vida que los hogares no afectados. Además, los hogares afectados destinan un menor gasto en alimentos y utilizan más estrategias de afrontamiento de consumo, lo que repercute en una menor cantidad y calidad de los alimentos.
- El estado de seguridad alimentaria y el acceso a información de eventos climáticos, ambientales y geofísicos están correlacionados. El porcentaje de hogares que no tiene acceso a información en inseguridad alimentaria es de 31 por ciento (más que el doble que el porcentaje de hogares que sí tiene acceso a esa información (15 por ciento).
- Un alto porcentaje de hogares (70 por ciento) manifestó que su hogar no está en una zona de riesgo o que desconoce si lo está (17 por ciento). Esta percepción está vinculada con el acceso a información de eventos climáticos, ambientales y geofísicos; al tener un plan de respuesta a emergencias y al haber recibido alguna capacitación en preparación ante desastres, lo que sugiere que una ruta de trabajo para mejorar la situación alimentaria en Guatemala podría ser la sensibilización sobre los riesgos a desastres priorizando áreas con más desconocimiento y riesgo latente.
- Las redes de protección social juegan un rol crucial tanto en la gestión de desastres como para garantizar la seguridad alimentaria a la población. Sin embargo, la cobertura de estas redes es aparentemente muy baja, solo cuatro de cada 100 hogares a nivel nacional manifestaron haber sido asistidos por el gobierno en los últimos seis meses.

- 6 de cada 100 personas entrevistadas indicaron que las personas en su hogar se sienten inseguras en su entorno, y 5 de cada 100 respondió que alguien de su hogar sufrió algún evento de violencia o inseguridad en los últimos 12 meses. No se encontró evidencia de que el haber sufrido algún evento de inseguridad o violencia o los 12 meses previos a la encuesta implique una mayor probabilidad de estar en inseguridad alimentaria, pero se recomienda profundizar esta relación bajo un diseño de investigación específico.
- Aproximadamente uno por ciento de los hogares (equivalente a 30,526 hogares) tiene una persona que, en los 12 meses previo a ser entrevistado, fue forzada u obligada a abandonar el lugar donde vivía, desplazándose principalmente dentro del territorio nacional.
- Existe un número de personas que son forzadas a desplazarse que no son identificadas por la metodología de entrevista a hogares de la ESA 2024 (hogares completamente desplazados y población internacional que se encuentra en movimiento), de las que un 87 por ciento tiene como principal necesidad el conseguir alimentos para su familia y que un 91 por ciento ha sido expuesta a algún problema de protección.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- Barillas, E. (2022). El antes, durante y después de la gestión de desastres en Guatemala. Colorado School of Mines. <https://reliefweb.int/report/guatemala/el-antes-durante-y-despues-de-la-gestion-de-desastres-en-guatemala>
- Bloom, M., McCoy, C., Hendrix-Dicken, A. D., Elenwo, C., Baxter, M. A., Coffey, S., & Hartwell, M. (2024). Association and disparities of food insecurity and exposure to violence: analysis of the National Survey of Children's Health. En Journal of Osteopathic Medicine (Vol. 124, Issue 8, pp. 369-376). Walter de Gruyter GmbH. <https://doi.org/10.1515/jom-2023-0263>
- Brinkman, Henk-Jan & Hendrix, Cullen. (2011). Food Insecurity and Violent Conflict: Causes, Consequences, and Addressing the Challenges. 10.13140/2.1.3379.2003.
- CARE (2022). Violencia basada en género e inseguridad alimentaria. Lo que sabemos y por qué la igualdad de género es la respuesta. <https://reliefweb.int/report/world/violencia-basada-en-generoe-inseguridad-alimentaria-lo-que-sabemos-y-por-que-la-igualdad-de-genero-es-la-respuesta>
- CIDH (2018). [CIDH y expertas de la ONU expresan su preocupación por situación de desalojos forzados y desplazamiento interno en Guatemala](https://reliefweb.int/report/guatemala/cidh-y-expertas-de-la-onu-expresan-su-preocupacion-por-situacion-de-desalojos-forzados-y-desplazamiento-interno-en-guatemala)
- CONRED. (2012). La vulnerabilidad asociada a los desastres: un marco conceptual para Guatemala. https://conred.gob.gt/documentos/MARCO_CONCEPTUAL_DELAS_VULNERABILIDADES.pdf
- CONRED. (2015). Manual de gestión para la reducción del riesgo a los desastres en los procesos de desarrollo municipal. [8-MANUAL-DE-GESTION-PARA-LA-REDUCCION-DEL-RIESGO-A-LOS-DESASTRES-EN-LOS PROCESOS-DE-DESARROLLO-MUNICIPAL.pdf](https://conred.gob.gt/documentos/8-MANUAL-DE-GESTION-PARA-LA-REDUCCION-DEL-RIESGO-A-LOS-DESASTRES-EN-LOS-PROCESOS-DE-DESARROLLO-MUNICIPAL.pdf)
- CONRED. (2024). Política Nacional de Reducción de Riesgo a los Desastres -PNRRD- 2024-2032. https://conred.gob.gt/wp-content/uploads/DCS_20240109_7_PNRRD.pdf
- DiFiore, G., Hannan, C., Fiks, A. G., Virudachalam, S., Glanz, K., & Mayne, S. L. (2022). Associations Between Food Insecurity and Neighborhood Safety, Social Cohesion, Social Control, and Crime Among Mothers of Preschool-Aged Children. En Journal of Health Care for the Poor and Underserved (Vol. 33, Issue 3, pp. 1258-1274). Project MUSE. <https://doi.org/10.1353/hpu.2022.0111>
- Entas, D., Padillah, R., Mursidi, A., & Noviandari, H. (2024). Food insecurity and criminal behavior: evidence from Indonesia. En Journal of Public Health. Oxford University Press (OUP). <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdae183>

European Commission. (2021). Inform Risk Index. <https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Subnational-Risk/Guatemala>

FEWSNET. (2017). Guatemala. Zonas de medios de vida. <https://fews.net/es/latin-america-and-caribbean/guatemala/mapa-de-zonas-de-medios-de-vida/enero-2017>

Kaila, H., & Azad, A. (2023). The effects of crime and violence on food insecurity and consumption in Nigeria. En Food Policy (Vol. 115, p. 102404). Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2023.102404>

MAGA/WFP. (2002). Cartografía y Análisis de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria. <https://www.maga.gob.gt/download/cartografia-guate.pdf>

NORCAP (2024). Protección Social en Emergencias: reforzando el marco normativo para la entrega de transferencias monetarias. Análisis colaborativo entre actores humanitarios y gubernamentales en Guatemala. <https://reliefweb.int/report/guatemala/proteccion-social-en-emergencias-reforzando-el-marco-normativo-para-la-entrega-de-transferencias-monetarias-analisis-colaborativo-entre-actores-humanitarios-y-gubernamentales-en-guatemala>

OMM. (2024). Se prevé que El Niño dé paso a La Niña este mismo año. <https://wmo.int/es/media/news/se-preve-que-el-nino-de-paso-la-nina-este-mismo-ano>

Prensa Libre (2021). Cómo Guatemala pudo perder hasta Q35 mil millones por daños en catástrofes desde 1998. <https://www.prensalibre.com/economia/como-guatemala-pudo-perder-hasta-q35-mil-millones-por-danos-en-catastrofes-desde-1998/>

Singleton, C. R. (2024). Exploring the Interconnectedness of Crime and Nutrition: Current Evidence and Recommendations to Advance Nutrition Equity Research. En Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics (Vol. 124, Issue 10, pp. 1249–1254). Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2024.03.008>

SGCCC. (2019). Primer Reporte De Evaluación Del Conocimiento Sobre Cambio Climático En Guatemala. Resumen para tomadores de decisión. Sistema Guatemalteco de Ciencias para el Cambio Climático. https://sgccc.org.gt/wp-content/uploads/2019/04/Resumen-ReporteCC_2019-04-09.pdf

UNHCR, WFP, UNICEF (2024). Reporte del Monitoreo de Flujos Mixtos. Abril – Junio 2024. <https://data.unhcr.org/en/documents/details/111444>

UNICEF (2021). Las niñas y niños de Guatemala son los más expuestos a los efectos de la crisis del clima de América Latina. <https://www.unicef.org/guatemala/comunicados-prensa/las-ni%C3%B1as-y-ni%C3%B1os-de-guatemala-son-los-m%C3%A1s-expuestos-los-efectos-de-la-crisis#:~:text=NUEVA%20YORK%2C%2020%20de%20agosto,que%20ha%20publicado%20hoy%20UNICEF.>

WFP y ACH. (2024). Fenómeno de El Niño. 2023-2024. América Latina y El Caribe. docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000157673/download/?_ga=2.75536860.877854854.1731511240-822475136.1690296788